41-D-24

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL. San Salvador Centro, a las diez horas con veinticuatro minutos del día catorce de junio de dos mil veinticuatro.

El día trece de mayo del corriente año, el señor _____ interpuso denuncia contra los señores _____ y _____, en su orden Director u Administrador, ambos del Hospital Amatepec; y el señor _____, Jefe del Departamento de Centros de Atención, todos ellos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); con la documentación que adjunta [ff. 1 al 30].

Al respecto, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. El artículo 80 del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) establece los supuestos que constituyen causales de improcedencia de la denuncia; entre ellas que el hecho denunciado no constituya transgresión a las prohibiciones o deberes éticos; y que éste sea de competencia exclusiva de otras instituciones de la Administración Pública, de conformidad con los términos establecidos en las letras b) y d) de dicha disposición.

Por lo que, toda conducta u omisión constitutiva de infracción administrativa debe estar descrita con claridad en una norma, por ende, la facultad sancionadora de esta institución se restringe únicamente a los hechos contrarios a los deberes y prohibiciones éticos regulados por la LEG, ya que la potestad sancionadora de la Administración Pública, es un poder que deriva del ordenamiento jurídico, encontrándose en la ley respectiva la delimitación de su ámbito de competencia.

El principio de *legalidad*, “[...] impone el actuar riguroso de la Administración conforme lo que estipule la ley en cuanto a la creación del catálogo predeterminado, claro y preciso de las infracciones penales y administrativas. Del mismo devienen dos principios que han adquirido una clara autonomía en esta sede, el de *reserva legal* y de *tipicidad*” (Sentencia del 29-IV-2013, Inc. 18-2008, Sala de lo Constitucional). La reserva legal obliga a los regímenes administrativos sancionatorios a que las limitaciones a derechos fundamentales deban realizarse únicamente mediante una ley formal – emanada de la Asamblea Legislativa–; lo que conlleva inevitablemente al respeto de la tipicidad, mediante la cual se configura la conducta regulada en la infracción administrativa, así como la sanción que corresponde a esta. La definición inequívoca de la materia de deber y prohibición es lo que permite a este Tribunal encajar los hechos planteados a una infracción determinada.

II. En su denuncia, el señor _____ señala que desde mayo de dos mil veinte, los señores _____ y _____, en su orden Director u Administrador, ambos del Hospital Amatepec, ordenaron de forma verbal la realización de obras de mantenimiento en dicho nosocomio sin el debido proceso de adjudicación, adquiriendo una deuda de treinta y tres mil setecientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América con ocho centavos (US\$33,781.08).

Manifiesta que los referidos servidores públicos le solicitaron tramitar el pago de las obras, sin la documentación que respaldara el procedimiento que debía efectuarse según la ley para ejecutar las mismas; por lo que se negó a “elaborar procedimientos inexistentes o falsificar documentos” (sic).

Indica que en agosto y octubre de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento de esta situación a la Subdirectora Administrativa y a la Jefa de Auditoría Interna, ambas del ISSS; pero la primera

“arremetió” (sic) contra él por no acceder a pagar las obras; y la segunda no quiso recibirlo en su despacho.

El día uno de noviembre de dos mil veintitrés, el señor _____, Jefe del Departamento de Centros de Atención del ISSS, realizó el pago de las obras, pese a conocer las irregularidades de la ejecución de las mismas.

Finalmente, menciona que en diciembre de dos mil veintitrés, interpuso aviso ante la Fiscalía General de la República; y en enero de este año solicitó auditoría a la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República para determinar responsabilidades.

III. Es menester aclarar que, toda autoridad administrativa está supeditada a una serie de principios de rango constitucional, entre los que destaca el de legalidad consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución. Como consecuencia de ello, la Administración Pública sólo puede actuar cuando existe una ley formal que la habilite para tal efecto, y dentro de los límites establecidos por la misma.

Así, para que la denuncia sea procedente ante este Tribunal es imprescindible que el asunto expuesto en la misma sea propio del marco ético establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la LEG.

En ese sentido, al analizar la relación fáctica detallada en el considerando anterior, se advierte que la conducta atribuida por el denunciante a los servidores públicos del Hospital Amatepec, de ordenar la realización de obras de mantenimiento en ese establecimiento de salud, sin un proceso de adjudicación; y al Jefe del Departamento de Centros de Atención del ISSS, de haber cancelado el monto de esas obras: ello no se adecúa a ninguno de los deberes y prohibiciones éticos constituidos en la LEG; y, por tanto, no pueden ser del conocimiento de este Tribunal, pues se trata de cuestiones de legalidad.

Por otra parte, la posible vulneración de la derogada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la actual Ley de Compras Públicas, o la normativa de la Corte de Cuentas de la República, no está vinculada con la materia que este Tribunal fiscaliza y, por tanto, debe ser planteado en las instancias correspondientes, a quienes corresponde privativamente el conocimiento de esa materia.

Asimismo, respecto del posible cometimiento de ilícitos penales, el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que la Fiscalía General de la República está obligada a ejercer la acción penal pública para la persecución de oficio de los delitos en los casos determinados por dicho Código, salvo las excepciones legales previstas.

Así, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “(...) la atribución de la dirección en la investigación del delito es asunto de la competencia de la Fiscalía General de la República y la colaboración en el procedimiento, de la Policía Nacional Civil.

En virtud de lo anterior, es de la competencia exclusiva de dichas autoridades, decidir, partiendo de cualquier dato o noticia, el inicio de una investigación delictiva, y por tanto, realizar todas aquellas diligencias que consideren necesarias para comprobar la veracidad de los informes recibidos.” (Resolución de la Sala de lo Constitucional emitida en el proceso de Habeas Corpus ref. 216-2007, del 15/IV/2008).

De esta manera, los hechos señalados por el denunciante podrían ser constitutivo de ilícitos penales, cuya investigación le corresponde de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 193 N.º 4 de la Constitución.

Y es que la tipificación de conductas y establecimiento de sanciones es creada por el legislador y no por la autoridad administrativa, pues esta última lo que realiza es su aplicación, como manifestación del respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica. En consideración a ello, cabe resaltar que *"el principio de tipicidad como derivación del principio de legalidad en materia punitiva, impone el límite a la Administración que únicamente pueda sancionar a una persona cuando exista previamente un tipo administrativo que describa de manera certera una conducta considerada ilegal"* (Resolución pronunciada el 26-VI-2018 por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo en el proceso referencia 00011-18-ST-COPA-2CO).

Así pues, este Tribunal se encuentra impedido de conocer respecto de los hechos objeto de denuncia antes señalados; por lo cual ésta deberá declararse improcedente.

Finalmente, es preciso acotar que la imposibilidad por parte de este Tribunal de controlar las actuaciones denunciadas, no significa una desprotección de los bienes jurídicos que pudieran verse comprometidos sino únicamente que deberán ser otras instancias las que, dentro de sus competencias, evalúen y determinen las responsabilidades que correspondan, pudiendo el denunciante, si así lo estima pertinente, avocarse a las mismas a fin de denunciar lo ocurrido.

Por tanto, con base en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental, y 80 letras b) y d) del Reglamento de dicha ley, este Tribunal **RESUELVE**:

a) *Declárase* improcedente la denuncia presentada por el señor _____ ; por los hechos y motivos expuestos en el considerando III de la presente resolución.

b) *Tiéndense* por señalados para recibir notificaciones la dirección y el medio técnico que constan a ff. 1 y 8 del presente expediente.

Notifíquese.

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN.

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme al criterio de la 21-20-RA-SCA del 16/11/2020 y lo establecido en el artículo 30 de la LAIP, se extiende la versión pública: